

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9º. Y 14 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, EN MATERIA DE CUIDADO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA KARINA ALEJANDRA TRUJILLO TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Quien suscribe, diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de cuidado infantil**, al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

I. La primera infancia es la etapa crucial de formación de toda persona; de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) “...es la etapa de la vida que va desde el embarazo hasta los ocho años de vida”.¹ Su importancia radica en que “...en este periodo ocurren momentos clave en el desarrollo del cuerpo y el cerebro y por lo tanto hay grandes oportunidades de brindar a cada niño o niña las bases para el aprendizaje, la salud y el comportamiento, pero también, hay riesgos si no se brindan los cuidados adecuados”.²

Por ello, la inversión en la primera infancia es de vital importancia. Al respecto, James J. Heckman (2016), economista y profesor de la Universidad de Chicago “demostró que las inversiones en el desarrollo de habilidades durante la primera infancia generan los mayores retornos económicos y sociales en comparación con inversiones en etapas posteriores de la vida” (como se citó en Loredó Ramírez, 2025).³

Así que, desde una perspectiva de finanzas públicas “invertir en la primera infancia representa una medida eficiente y estratégica. Este tipo de inversión no sólo contribuye al desarrollo individual de las infancias, sino que también promueve la equidad social, reduce el gasto futuro en salud y atención social, y fortalece la economía al potenciar el talento humano desde etapas tempranas” (Loredó Ramírez, 2025).⁴

En ese tenor, la atención e inversión en la primera infancia debe ser fundamental para el Estado mexicano, así que, reconocer la prioridad de trabajar a favor de la niñez, implica hacer más programas y políticas que promuevan su cuidado, protección, atención y desarrollo, a través de la orientación del gasto y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Por lo anterior, coincido con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990), que señala: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.⁵

De tal manera que los tres niveles de gobierno deben establecer programas que promuevan la educación, el cuidado, la protección, la atención y el desarrollo de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en espacios, cualquiera que sea su denominación ya sea en la modalidad pública o mixta.

II. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), establece “la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especial –por– su vulnerabilidad”.⁶ Al respecto, su artículo 3o., estipula lo siguiente:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.⁷

Por ello, como Poder Legislativo estamos obligados a llevar a cabo todas las medidas legislativas que, en atención al interés superior del niño, aseguren su protección y su cuidado; y, al Poder Ejecutivo (en los tres niveles de gobierno), a llevar dichas medidas a la realidad.

Además, el artículo 18 de la Convención referida en este apartado, también establece que a efecto de “...garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los estados parte... velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”⁸; para ello, señala que, “...adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.⁹

III. Los niños que reciben servicios en instalaciones de cuidado infantil debidamente reguladas, obtienen múltiples beneficios como el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y lingüísticas, la creación de hábitos saludables y una preparación para la escuela.

En lo que respecta a las habilidades sociales, podemos decir que un niño que está rodeado de más niños aprende la empatía, la capacidad de compartir, de cooperar, de respetar, de turnarse, la resolución de conflictos y a gestionar sus propias emociones y las de sus compañeros. En cuanto a las habilidades cognitivas, los pequeños tienen un gran campo de acción, al desarrollar la atención, la memoria, el razonamiento, pueden aprender a pensar de forma más enfocada y a la resolución de problemas o desafíos, preparación que les servirá para su vida escolar y a fomentar su creatividad y curiosidad. Finalmente, en lo tocante a las habilidades lingüísticas, los niños aprenden a comunicarse de forma verbal y corporal, la capacidad de escuchar y comprender instrucciones, amplían su vocabulario y adquieren habilidades para comunicarse en un contexto social.

Por ello, el Gobierno federal ha llevado a cabo algunas acciones para atender el tema de los cuidados, así como algunos gobiernos estatales, como el de Chiapas; sin embargo, aún podemos redoblar esfuerzos y fortalecer dichos programas para incrementar el servicio que prestan en beneficio de nuestra niñez, para que todos los menores de edad que así lo requieran puedan tener lugares seguros donde se les provea de cuidado y protección, así como de herramientas para un desarrollo óptimo que sume a su educación y a su desarrollo integral.

IV. La falta de servicios de cuidado oportuno y adecuado puede impactar negativamente el desarrollo de los niños; y, a su vez, también tiene impacto en las familias mexicanas, principalmente para las mujeres, quienes en la mayoría de los casos son las encargadas del trabajo no remunerado del hogar.

Para el caso de los niños, Loredó Ramírez (2025), menciona que, “...el 55.7 por ciento carece de acceso a servicios de cuidado infantil (CIEP, Early Institute, Ethos 2025). Estas condiciones no son neutras: afectan desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos y refuerzan las desigualdades de género, al recargar sobre las mujeres el trabajo no remunerado de cuidados. Esta sobrecarga limita su participación económica, política y educativa, generando un círculo vicioso de exclusión”.¹⁰

Al respecto, la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), define el trabajo no remunerado de los hogares (TNRH) como “el tiempo que se utiliza en las labores domésticas y de cuidados, y que realizan los miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo de este sin obtener un pago o remuneración” (Inegi, 2023, p. 4).¹¹ Dicha cuenta, también señala que “...al medir este trabajo (TNRH) en número de horas y el valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad” (Inegi, 2023, p. 5).¹²

Por ello, estimo que, como parte de la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado, se debe favorecer la instalación y el mantenimiento de centros para el cuidado, educación, la protección, la atención y el desarrollo integral infantil. Lo que beneficiará a los pequeños y a las mujeres para que tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral, como una responsabilidad compartida.

V. Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada por México en 1980 y ratificada el 23 de marzo de 1981, estableció en su artículo 11, numeral 2, que a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los estados parte “tomarán medidas adecuadas para suministrar los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños”.¹³

Por ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW (2018), en las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, “reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal... intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género, así como, agilizar la aprobación de la política nacional de cuidado para ofrecer servicios de guardería suficientes, accesibles y adecuados”.¹⁴ El derecho al cuidado, no sólo debe ser reconocido sino que de acuerdo al compromiso de México con la CEDAW debe ser garantizado.

VI. Además, derivado del reciente Compromiso de Tlatelolco (2025), consecuencia de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los estados parte, reconocieron que “...la actual organización social de los cuidados en América Latina y el Caribe es injusta y desigual y ha afectado históricamente a las mujeres, adolescentes y niñas, en particular a las indígenas y afrodescendientes”,¹⁵ acordaron que para avanzar en el paradigma de la sociedad del cuidado y responder a la crisis de los cuidados, adoptarían:

“...marcos normativos, políticas, programas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad, sostenibles en el tiempo, que respeten, protejan y cumplan los derechos de quienes reciben y proveen cuidados de forma remunerada y no remunerada... garanticen la plena, significativa e igualitaria participación de las mujeres en la vida pública, en la política y en la economía, y liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y a la educación y disfrutar plenamente de su autonomía”.¹⁶

Así que para dar cumplimiento a esas políticas y programas a favor de los cuidados, en el Compromiso de Tlatelolco (2025), los estados se comprometieron a impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas, destinar presupuestos con enfoque de género e implementar mecanismos específicos e innovadores de financiamiento para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles que garanticen entre otras cosas el derecho al cuidado, considerando la implementación de sistemas integrales de cuidado que promuevan la corresponsabilidad social y de género.¹⁷

De manera que el Estado mexicano está obligado llevar a cabo programas y políticas que garanticen el derecho al cuidado, a la protección, atención y desarrollo de niñas y niños; así que la inversión en centros de cuidado infantil coadyuva sin duda alguna al cumplimiento de ese compromiso.

VII. Finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., establece que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas y niños en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.¹⁸ En ese tenor, dicho precepto constitucional también establece que el criterio que orientará a la educación será integral “...educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar”.¹⁹

Asimismo, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, señala que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.²⁰

Por ello, es necesario que la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, establezcan programas que promuevan la educación, el cuidado, la protección, la atención y el desarrollo de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en centros de atención, a los que hace referencia el artículo 8o., fracción I, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

VIII. Por lo anterior, para mayor claridad a la propuesta, se incluye un cuadro comparativo de la misma:



LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	
Texto vigente	Texto propuesto
<p>Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.</p> <p>(Sin correlativo)</p>	<p>Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.</p> <p>Corresponde a la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, de conformidad con lo dispuesto por esta ley, establecer programas que promuevan la educación, el cuidado, la protección, la atención y el desarrollo de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en Centros de Atención.</p>
<p>Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.</p> <p>(Sin correlativo)</p>	<p>Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.</p> <p>Para lo cual favorecerán la instalación y el mantenimiento de Centros de Atención, para el cuidado, educación, protección, atención y desarrollo integral infantil.</p>

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de cuidado infantil

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9o. y un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en Materia de Cuidado Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Corresponde a la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, de conformidad con lo dispuesto por esta ley, establecer programas que promuevan la educación, el cuidado, la protección, la atención y el desarrollo de niñas y niños por medio de la prestación de servicios integrales en Centros de Atención.

Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.

Para lo cual favorecerán la instalación y el mantenimiento de Centros de Atención, para el cuidado, educación, protección, atención y desarrollo integral infantil.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fondo de las Naciones Unidas [UNICEF]. (s.f.). “La primera infancia importa”. Panamá. Disponible en: <https://www.unicef.org/panama/primerolaprimerainfancia#:~:text=La%20primera%20infancia%20es%20la,los%208%20a%C3%B1os%20de%20vida> .

2 Ibidem (UNICEF).

3 Loredó Ramírez, Itzel. (2025). “Inversión en cuidados para la primera infancia: Panorama y retos”. CIEP. Disponible en: <https://ciep.mx/inversion-en-cuidados-para-la-primera-infancia-panorama-y-retos/>

4 Op. Cit. (Loredó Ramírez, 2025).

5 UNICEF. (2006). "Convención sobre los Derechos del Niño". Unidos por la infancia 1946-2006. Madrid. Disponible en <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

6 Convención sobre los Derechos del Niño. (1989). UNICEF. Disponible en <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

7 Op. Cit. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 10).

8 Op. Cit. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 16).

9 Ibidem.

10 Op. Cit. (Loredo Ramírez, 2025).

11 INEGI. 2023. "Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2023", Comunicado de prensa número 680/24, de noviembre de 2024. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CSTNRHM/CSTNRHM2023.pdf>

12 Ibidem.

13 Op. cit. (CEDAW) Art. 11.

14 Gobierno de México. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres [CONAVIM]. (2018). "Las recomendaciones del Comité CEDAW a México". Disponible en <https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones-del-comite-cedaw-a-mexico>

15 Compromiso de Tlatelolco. (15 de agosto 2025). Los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe participantes en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, reunidos del 12 al 15 de agosto de 2025, en Tlatelolco, Ciudad de México. Disponible en https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2025-08/esp_2500331s_crm.16_compromiso_tlatelolco.pdf

16 Op. Cit. (Compromiso de Tlatelolco, 2025).

17 Ibidem.

18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). [Const.]. México. Artículo 3. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

19 Op. Cit. (Const., art. 3).

20 Op. Cit. (Const., art. 4).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2025.

Diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (rúbrica)